



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA.

ACCIONANTE: JUAN VILLA CHARRIS

ACCIONADO: AIR-E S.A. E.S.P. y SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.

RADICACIÓN: 08-001-31-05-013-2024-00065-00.

DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS: DEBIDO PROCESO y VIDA DIGNA.

INFORME SECRETARIAL: Señor Juez: Al Despacho la presente acción de tutela, la cual se encuentra pendiente de decisión. Sírvase proveer.

Barranquilla, 21 de marzo de 2024

MARIA B POTES SANTODOMINGO
Secretaria

JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA.

Barranquilla, veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

Procede el Despacho a proferir sentencia dentro de la acción de tutela promovida por el señor JUAN VILLA CHARRIS, quien actúa en nombre propio, contra AIR-E S.A. E.S.P. y SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, con el fin de que se ampare su derecho fundamental al Debido Proceso y Vida Digna.

I. ANTECEDENTES:

1.1 Solicitud de Tutela.

Pretende el accionante que se le tutele su derecho fundamental al debido proceso y se ordene “a la empresa Air-e S.A.S. E.S.P. que cese de emitir ordenes de suspensión para el NIC 7289443 y normalice el servicio del predio con una tarifa residencial. 2. Que se ordene a la Superintendencia De servicios Públicos Domiciliarios Territorial Noroccidente que dé tramite a todos los recursos que se han presentado desde agosto del 2023 y hasta la fecha, cuyos comprobantes adjuntos.”

1.2 Hechos.

Afirma la parte accionante que pretende reducir considerablemente el costo del servicio de energía eléctrica en su vivienda, desde enero del 2023, para lo cual funcionan en su predio unos paneles solares que producen gran parte de la energía que se consume allí y que exportan energía a la red de la accionada AIR-E. Que, por motivos desconocidos, desde ese mismo mes, la empresa comenzó a facturarle como usuario comercial, por lo que el costo de la energía subió considerablemente, así como los impuestos de seguridad ciudadana y alumbrado público. Que, desde esa fecha, comenzaron a llegar facturaciones en las que se indicaba que tenía un consumo de 4000 kWh en promedio, y en ese sentido, un coste total en la facturación de energía, de \$6.000.000 en promedio. Que por tales facturaciones, procedió a buscar la ayuda de la empresa AIR-E S.A.S. para que le indicaran cuál era el problema, porque en lugar de la disminución del costo de la energía con la instalación de los paneles, subió demasiado en su vivienda que si bien es grande, es habitada por 4 personas. Manifiesta que la respuesta de la empresa para el mes de abril del 2023, fue proponer un acuerdo de pago, pero sin solucionar el tema del alto consumo que se siguió generando. Que el mes de junio, comenzó a reclamar las facturaciones del servicio, porque en ninguna de ellas, se observa la medición del

Calle 40 NO. 44-39. Piso 4.

Teléfono: 3885156 Ext. 2030. www.ramajudicial.gov.co

Barranquilla – Atlántico. Colombia

Correo: lcto13ba@cendoj.ramajudicial.gov.co



No. SC5780 - 4



No. GP 059 - 4



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

consumo y la diferencia de lectura de cada ciclo de facturación, información es obligatoria en la facturación. Que ha venido generando una reclamación mensual, con cada facturación, hasta diciembre del 2023, que, a pesar de estar reclamadas todas las facturas, la empresa comenzó a suspender el servicio una vez por semana. Que el 06 de enero del 2024, la accionada suspendió totalmente el servicio, retirando la acometida del predio y aun así, yendo todas las semanas a realizar revisiones. Que él y su familia tuvieron que mudarse a otro lugar por las dificultades que supone lo anterior, y que en enero y febrero del 2024, a pesar de no contar con el servicio, la empresa siguió facturando por montos de \$4.000.000 en promedio cada mes, aunque no hay servicio en dicho predio. Alega que hay siete meses de haber presentado los primeros recursos y aun no tienen el primer fallo o comunicación por parte de la Superintendencia de Servicios públicos. Que, no ha podido acceder a la administración de justicia, por cuanto la entidad que debería dirimir el asunto sigue siendo inoperante. Que todos sus reclamos son por los mismos motivos, y que resolver uno implica dar la misma resolución a todos, porque la situación reclamada ha sido la misma.

1.3 Trámite Procesal.

La presente acción de tutela fue impetrada ante la Oficina Judicial de la ciudad de Barranquilla el 12 de marzo de la presente anualidad, la cual por reparto correspondió a este Juzgado, siendo recibida en la Secretaría del Despacho ese mismo día. La admisión tuvo lugar en la misma calenda, mediante la cual se ordenó a las accionadas que en el término de dos (2) días presentara un informe sobre los hechos de la acción, aportara y solicitara las pruebas que pretendiera hacer valer en su favor, en especial lo relacionado a las órdenes de suspensión del servicio de energía para el inmueble identificado con NIC 7289443, así como los recursos interpuestos ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

1.3.1.- Contestación de las accionadas

La accionada AIR-E S.A E.S.P, guardo silencio ante el llamado de esta agencia judicial, dejando vencer el término sin allegar pronunciamiento alguno.

Por su parte, la accionada SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, en calenda 15 de marzo de 2024, allegó el informe solicitado, alegando que existe falta de legitimación por pasiva, toda vez que el derecho que el accionante aduce le ha sido vulnerado por el prestador, no ha sido conocido por esa entidad como segunda instancia en los procesos de reclamación, dato que se obtiene de revisar la base del sistema de la entidad. Indican al despacho que mientras el usuario no utilice los mecanismos de defensa que le otorgó la Ley 142 de 1994, en el capítulo que comprenden los artículos 152 al 159 de la mencionada ley, no se puede hablar de presunta violación de derechos por parte de esa entidad. Que, el derecho invocado por la actora, no ha sido vulnerado por esa entidad, porque no utilizó los mecanismos de defensa que prevé la norma en materia de servicios públicos domiciliarios y hasta que la actora no haga uso en debida forma, no abre la competencia de la segunda instancia, por tanto, esa entidad no está legitimada para actuar en la presente acción, en razón a la falta de competencia y que la acción se torna improcedente por mandato legal. Así las cosas, ante la ausencia de violación de derechos fundamentales deberá declararse la improcedencia del amparo deprecado, por ende, solicitan, que se desvincule a esta Superintendencia de la presente acción de tutela, por no existir una coincidencia de derecho entre el titular de la obligación pretendida y el sujeto frente a quien dicha conducta se reclama.

Calle 40 NO. 44-39. Piso 4.
Teléfono: 3885156 Ext. 2030. www.ramajudicial.gov.co
Barranquilla - Atlántico. Colombia
Correo: lcto13ba@cendoj.ramajudicial.gov.co



No. SC5780 - 4



No. GP 059 - 4



2.1 Competencia del Juzgado.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en armonía con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, así como el Decreto 1983 de 2.017 y 333 de 2.021, este despacho es competente para conocer de la presente acción de tutela.

2.2 Naturaleza de la acción de tutela.

A guisa de exordio, este Despacho ha venido fijando su posición teniendo como cimiento el artículo 86 de la Carta Política y lo prescrito en el artículo 6 del decreto 2591 de 1991, que guarda ilación con el precepto del artículo 1 del decreto 306 de 1992, en lo que atañe a la procedibilidad de la acción de tutela como mecanismo residual de protección inmediata de los derechos fundamentales, resulta ineludible realizar un juicio de valor a fin de determinar si la presente acción de tutela procede o no, por ello, previamente se debe constatar la existencia de mecanismos alternos de defensa judicial, y en el evento de encontrar que si existen, y son adecuados para la defensa de los derechos presuntamente vulnerados la acción devendrá en improcedente, lo que no es óbice para estudiar la viabilidad de la referida acción como mecanismo transitorio en el evento que estuviera de por medio la inminente consumación de un perjuicio irremediable.

2.3 Problema Jurídico.

El problema jurídico que se debe resolver para determinar si en el caso bajo estudio se ha vulnerado el derecho fundamental alegado por el accionante en el libelo de tutela, se sintetiza en los siguientes interrogantes: *¿Si procede la presente acción de tutela para ordenar a la empresa de servicios públicos domiciliarios a que cese la emisión de órdenes de suspensión del servicio de energía, y normalice la prestación con una tarifa residencial, y se de trámite a unos recursos supuestamente interpuestos ante la Superintendencia de Servicios públicos domiciliarios?, de ser así si hubo vulneración de los derechos fundamentales alegados.*

2.4. Marco Normativo y Jurisprudencial para resolver el problema jurídico:

2.4.1. La Intervención del Juez de Tutela:

Analizando la actuación de una empresa de servicios públicos domiciliarios, la Corte Constitucional expresó:

“Este repertorio de violaciones al derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, al derecho a presentar y controvertir las pruebas y a que se demuestre en el caso de fraudes la culpabilidad del afectado, permiten advertir a la Corte la presencia de un ataque sistemático al núcleo esencial del derecho al debido proceso que pone al usuario/ propietario y/ o suscriptor en un manifiesto estado de indefensión violatorio de su debido proceso que exige la inmediata intervención del juez de tutela a efectos de que dichas garantías de carácter fundamental no se extingan.

En este sentido, debe precisarse que la actuación del juez de tutela no está orientada a cuestionar la validez de los actos administrativos proferidos por la empresa de servicios públicos domiciliarios ni por la Superintendencia del ramo, puesto que ello corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino que ella tiene como finalidad la protección efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de quien fuera sometido arbitraria y caprichosamente por las autoridades a un estado de indefensión que desconoce de forma sistemática su derecho inalienable al debido proceso.

Calle 40 NO. 44-39. Piso 4.

Teléfono: 3885156 Ext. 2030. www.ramajudicial.gov.co

Barranquilla – Atlántico. Colombia

Correo: lcto13ba@cendoj.ramajudicial.gov.co



No. SC5780 - 4



No. GP 059 - 4



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Si como se ha sostenido en esta providencia, la protección de los derechos consagrados en la Constitución debe ser efectiva y es deber de todas las autoridades observarlos y respetarlos en toda actuación que desarrollen o decisión que profieran, no resulta razonable que so pretexto de la existencia de otro medio de defensa judicial la empresa de servicios públicos viole indiscriminada y sistemáticamente garantías fundamentales. En estos eventos es menester la intervención del juez de tutela por cuanto la primacía de los derechos inalienables (Art. 5 C.P.) de la persona obligan al juez constitucional a restablecerlos cuando ellos han sido conculcados”.

(...)

“Es necesario en todo caso precisar, que la intervención del juez constitucional es excepcional en esta clase de conflictos y sólo opera cuando es manifiesta la indefensión del usuario frente a las autoridades que le imponen la sanción y de las circunstancias propias del asunto no queda duda que la empresa de servicios públicos estaba dando, al administrado una garantía meramente formal de su derecho al debido proceso, ejerciendo de forma arbitraria la autoridad que le otorgó el Estado, produciendo de esa manera decisiones en contra de los usuarios patentemente irrazonadas”. <Sentencia T-270 del 19 de marzo de 2004 M. P. Dr. Jaime Córdoba Triviño >.

2.4.2 Procedencia General de la Acción de Tutela y el requisito de la falta de prueba o ausencia de la acción u omisión de la parte accionada, a pesar de su informalidad.

Sabido es, que el mencionado artículo 86 de la Constitución establece que toda persona tiene la facultad de interponer acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos “(...) resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública (...) [o de] particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.”

En este sentido, como se desprende del texto constitucional, para que la acción de tutela sea procedente, se requiere que exista una actuación o una omisión por parte de la demandada, pues las meras suposiciones de afectación de los derechos fundamentales no son suficientes. Por lo tanto, la acción de tutela siempre resultara viable siempre que se origine en hechos ciertos y reconocidos de cuya ocurrencia se puede inferir la violación o vulneración de derechos fundamentales¹, sin que en nada afecte su característica de informalidad toda vez que esta no se supedita a las simples amenazas y conjeturas frente a la cual una persona considera que se le están afectando derechos fundamentales, cuando tanto la presunta la amenaza como la vulneración, materialmente no ha ocurrido.

Evidentemente, esta regla de procedencia es también análoga para aquellos casos en los cuales los particulares han actuado o dejado de hacerlo, pues el presupuesto lógico necesario es el mismo: una amenaza o violación concreta y no hipotética de los derechos fundamentales.

2.4.3.- De los Presupuestos Procesales y Requisitos Generales de Procedibilidad de la Acción de Tutela. Carácter residual y subsidiario del mecanismo de amparo.

Ahora bien, respecto al carácter residual y subsidiario de la presente acción, es de recordar que el inciso tercero del artículo 86 de la Constitución dispone que la acción de tutela “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”, y en desarrollo de esta norma el artículo 6° del Decreto 2591 de 1.991, señala: “Causales de Improcedencia de la Tutela. La acción de tutela no procederá: **1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.** La

¹ Ver sentencias T-279 y T-341 de 1997, T-812/00, T-1286/00, T-1683/00 y T-1741/00, entre otras
Calle 40 NO. 44-39. Piso 4.

Teléfono: 3885156 Ext. 2030. www.ramajudicial.gov.co

Barranquilla – Atlántico. Colombia

Correo: lcto13ba@cendoj.ramajudicial.gov.co



No. SC5780 - 4



No. GP 059 - 4



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (...)”.

La Corte Constitucional ha indicado que, dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho². Sin embargo, también ha dicho que esta regla tiene dos excepciones que se presentan cuando la acción de tutela es: (i) interpuesta como mecanismo transitorio con el fin de evitar un perjuicio irremediable o (ii) como mecanismo principal cuando existiendo otro medio de defensa judicial este no es idóneo ni eficaz para la defensa de los derechos fundamentales conculcados o amenazados.

Así lo sostuvo, por ejemplo, en sentencia T-235 de 2.010, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva, al afirmar:

“Para que la acción de tutela sea procedente como mecanismo principal, el demandante debe acreditar que, o no tiene a su disposición otros medios de defensa judicial, o teniéndolos, éstos, no resultan idóneos y eficaces para lograr la protección de los derechos fundamentales presuntamente conculcados. A su turno, el ejercicio del amparo constitucional como mecanismo transitorio de defensa iusfundamental, implica que, aún existiendo medios de protección judicial idóneos y eficaces, estos, ante la necesidad de evitar un perjuicio irremediable, pueden ser desplazados por la acción de tutela³. En este caso, esa comprobación, ha dicho la Corte, da lugar a que la acción de tutela se conceda en forma transitoria, hasta tanto la jurisdicción competente resuelve el litigio en forma definitiva.”

Con base en el anterior derrotero, la misma Corporación ha advertido que cuando el accionante cuenta con otro medio de defensa judicial el juez de conocimiento debe determinar si el procedimiento alternativo es eficaz para proteger de forma efectiva y oportuna los derechos fundamentales invocados y si ofrece una solución clara, definitiva y precisa a las pretensiones puestas en consideración, para lo cual es necesario analizar, entre otros, los siguientes aspectos: (i) el objeto del proceso judicial con el que se cuenta y (ii) el resultado esperado en términos de protección efectiva y oportuna de los derechos fundamentales invocados.

Al respecto en sentencia T-795 de 2.011, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio, señaló:

“Es así como en aquellos casos en que se logra establecer la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, debe ponderarse la idoneidad de dicho medio de protección, valorando el caso concreto y determinando su eficacia en las circunstancias específicas que se invocan en la tutela⁴. Por esta razón, el juez constitucional debe establecer si el procedimiento alternativo permite brindar una solución ‘clara, definitiva y precisa’⁵ a las pretensiones que se ponen a consideración del debate iusfundamental y su eficacia para proteger los derechos invocados.”

² Corte Constitucional, sentencias T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010 y T-177 de 2011, entre muchas otras.

³ “Sobre la figura del perjuicio irremediable y sus características, la Corte, en sentencia T-786 de 2008 expresó: “Dicho perjuicio se caracteriza, según la jurisprudencia, por lo siguiente: (i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad”. Así mismo, sobre las características que debe reunir el perjuicio irremediable, pueden consultarse las Sentencias T-225 de 1993, SU-544 de 2001, T-1316 de 2001, T-983 de 2001, entre otras”.

⁴ “El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 dispone que ‘La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante’.

⁵ “Sentencia T-803 de 2002”.

Calle 40 NO. 44-39. Piso 4.

Teléfono: 3885156 Ext. 2030. www.ramajudicial.gov.co

Barranquilla – Atlántico. Colombia

Correo: lcto13ba@cendoj.ramajudicial.gov.co



No. SC5780 - 4



No. GP 059 - 4



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Por ello, la jurisprudencia constitucional ha considerado necesario apreciar frente al medio de defensa alternativo, entre otros aspectos: ‘(a) el objeto del proceso judicial que se considera que desplaza a la acción de tutela y (b) el resultado previsible de acudir al otro medio de defensa judicial respecto de la protección eficaz y oportuna de los derechos fundamentales’⁶. Estos elementos, aunados al análisis de las circunstancias concretas del caso, permiten corroborar si el mecanismo judicial de protección alterno es eficaz para la defensa de los derechos presuntamente conculcados. (...)” (Subrayas fuera de texto original).

Y, en cuanto al perjuicio irremediable se ha referido en los siguientes términos:

“[U]n perjuicio irremediable se configura cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo neutralicen.”⁷

Así mismo, la Corte Constitucional ha precisado las características del perjuicio irremediable, a saber:

“A)... **inminente**: ‘que amenaza o está por suceder prontamente’. Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética. (...)”

B). Las **medidas** que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser **urgentes**, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real Academia. (...)”

C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea **grave**, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. (...)”

D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea **impostergable**, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos. (...)”⁸

Y en sentencia la T-514 de 2.003, M.P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett, resaltó la importancia del deber que tiene el juez constitucional de verificar el cumplimiento de los factores de procedibilidad de la acción de tutela, ya que sólo de esta forma se puede lograr la protección de los derechos fundamentales sin desarticular el sistema de competencias y procedimientos propio del Estado constitucional de derecho. Sobre el particular, dijo:

“7. Considera entonces la Corte que tales reglas, a las que debe sujetarse el ejercicio de la acción de tutela y su correcta ejecución por parte de los jueces, permiten que con la misma, a la vez que se consigne el propósito de la protección de los derechos fundamentales, no se desplacen las acciones ordinarias y de paso se evite que por esta vía se llegue a desarticular el sistema de competencias y procedimientos propio del Estado Constitucional de derecho. (...)”

Bajo los anteriores parámetros normativos y jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional, entrará el Despacho a resolver el caso bajo estudio.

2.5 Caso concreto:

⁶ “Sentencia T-822 de 2002, reiterando lo dicho en la sentencia T-569 de 1992 la cual señaló lo siguiente: ‘De allí que tal acción no sea procedente cuando exista un medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable’.”

⁷ Corte Constitucional, sentencia T-634 de 2006.

⁸ Corte Constitucional, sentencia T-225 de 1993.

Calle 40 NO. 44-39. Piso 4.

Teléfono: 3885156 Ext. 2030. www.ramajudicial.gov.co

Barranquilla – Atlántico. Colombia

Correo: lcto13ba@cendoj.ramajudicial.gov.co



No. SC5780 - 4



No. GP 059 - 4



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

En el caso que ahora ocupa la atención del Despacho, la pretensión del accionante al instaurar la acción de tutela, no es otra que obtener mediante este mecanismo excepcional, que se le ordene a la accionada AIR—E S.A E.S.P, que cese de emitir ordenes de suspensión para el NIC 7289443 y normalice el servicio del predio con una tarifa residencial, e igualmente, que se ordene a la Superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios que dé trámite a todos los recursos que aduce ha interpuesto.

Por su parte, la accionada AIR-E S.A. E.S.P., no rindió oportunamente el informe requerido por este Juzgado, motivo por el cual ha de tenerse en cuenta el artículo 20 del decreto 2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de nuestra Constitución Política, cuyo texto reza: “Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa”. Sin embargo, no es dable desatender que esta es una presunción legal y ello implica que admite prueba en contrario, por lo que, si bien es importante al momento de la valoración probatoria del estudio del caso en la presente acción, no es una imposición que lleve al juzgador a conceder todo lo que quiera el accionante; así lo ha establecido la H. Corte Constitucional en Sentencia T-392 de 1994. M.P. Dr. Jorge Arango Mejía y reiterado en el Auto No 121 de 2000 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

De otro lado, la accionada SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, alega que el accionante no utilizó los mecanismos de defensa que prevé la norma en materia de servicios públicos domiciliarios y por tanto no abrió la competencia de la segunda instancia, por lo que esa entidad, no está legitimada para actuar en la presente acción, por falta de competencia, estimando que la acción se torna improcedente.

Ahora bien, de las pruebas aportadas del trámite de la presente acción constitucional, puede evidenciarse que el accionante tuvo la posibilidad de controvertir las decisiones de la empresa de servicios públicos accionada por medio del agotamiento de la actuación administrativa. De acuerdo con ello, se encuentra que se le permitió ejercer su derecho de defensa, pues se le otorgó la oportunidad de ser oído, aportar pruebas y controvertir las que le resulten adversas, sin que se acredite la interposición de los recursos que aduce haber realizado en la demanda de amparo frente a las decisiones empresariales como respuesta a sus reclamaciones.

Así las cosas, lo que se pone de presente es que ante lo pretendido por el actor, quien no ha acreditado la interposición de los respectivos recursos ante las decisiones empresariales de la empresa accionada que cuestiona, la acción de tutela no está destinada a sustituir los recursos y medios de impugnación previstos en el ordenamiento jurídico para controvertir actos administrativos, dado que en todo caso la parte accionante dispone de los recursos reposición ante la empresa accionada y en subsidio el de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, e incluso de las acciones de nulidad ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo respecto de lo anterior en donde puede solicitar la suspensión del respectivo acto, siendo que además este mecanismo subsidiario no está previsto para la protección de derechos de estirpe legal y meramente patrimonial, como en últimas persigue el accionante, no encontrándose tampoco acreditada la certeza razonable o evidencia objetiva de la ocurrencia de un perjuicio irremediable o la proximidad de un daño grave e irreparable en los derechos fundamentales del actor que habilite excepcionalmente la tutela con respecto a las entidades que se demandan, siendo que no se evidencia en el sub-examine, se itera, de que se hayan interpuesto y concedido los recursos a que se hace mención frente a las decisiones empresariales aportadas de las que se desprende que contra ellas la propia empresa advirtió sobre la procedencia de los recursos, así como tampoco obra

Calle 40 NO. 44-39. Piso 4.

Teléfono: 3885156 Ext. 2030. www.ramajudicial.gov.co

Barranquilla – Atlántico. Colombia

Correo: lcto13ba@cendoj.ramajudicial.gov.co



No. SC5780 - 4



No. GP 059 - 4



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

evidencia del trámite o recepción de algún recurso que conozca actualmente la Superintendencia accionada, si se repara que ni siquiera se aportó prueba sumaria de ello, pues recuérdese que la Jurisprudencia Constitucional también ha advertido que: “(...) la mera afirmación de que se está sufriendo un perjuicio irremediable o de que el medio judicial ordinario es ineficaz, no basta para declarar la procedencia de la acción de tutela pues el accionante debe, al menos, mencionar los hechos que le permitan al juez deducir la existencia de un perjuicio irremediable o la ineficacia del medio ordinario de defensa⁹.

Además, el Máximo Tribunal de lo Constitucional en casos similares al que hoy ocupa la atención del Despacho, ha esgrimido:

“(…)”

5. Improcedencia de la acción de tutela como regla general, respecto de la expedición de actos administrativos por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.

Como regla general esta Corte ha señalado, que las acciones de tutela que tengan como fin controvertir las actuaciones de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, resultan improcedentes, pues se tienen a su disposición otros mecanismos de defensa judicial, como las acciones respectivas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en donde incluso, puede solicitarse la suspensión provisional del acto demandado.

Al respecto esta Corte ha indicado que “las empresas y entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, independientemente de su condición de estatal o privada, gozan de un conglomerado de derechos, poderes y prerrogativas de autoridad pública que las habilitan para cumplir funciones administrativas que van desde la resolución de peticiones, quejas y reclamos hasta la decisión del recurso de reposición”¹⁰ en el ejercicio de sus funciones dichas entidades están sujetas a los mismos controles que el ordenamiento jurídico prevé para las actuaciones de las autoridades públicas, esto es, en general, a los principios constitucionales y legales que rigen la función administrativa, y en especial, el respeto por los derechos fundamentales de las personas.

Ha establecido además esta Corporación, que aunque las prerrogativas reconocidas por la Ley a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios¹¹ son garantías para el adecuado funcionamiento de los servicios que prestan, su ejercicio no puede ser arbitrario, por tanto, el mismo ordenamiento estableció una serie de mecanismos, tanto administrativos como judiciales, para que, cuando estas entidades desconozcan en su actuación las normas jurídicas que las rigen, sea posible su corrección ante la misma entidad, ante aquella que las vigila y controla – Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – o ante las instancias jurisdiccionales respectivas¹².

Adicionalmente a lo expuesto, la Corte en sentencia T-720 de 2004, reiterada posteriormente en diversos pronunciamientos¹³, llegó a la siguiente conclusión:

“A partir del anterior rastreo jurisprudencial, puede inferirse que dada la importancia y el impacto social que tienen los servicios públicos domiciliarios en el diario vivir de todos los

⁹ Sentencia T-205 de 2010, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.

¹⁰ Corte Constitucional. Sentencia C-558 de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería.

¹¹ La ley 142 de 1994 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, fijó las pautas que regulan la relación entre las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y los particulares. En esta Ley se dispuso que dichas empresas tienen la facultad de actuar como si fuesen particulares pero, a su vez, dotó a las mismas de ciertas facultades que son propias de las autoridades públicas “tal es el caso de las potestades que les confiere la Ley con relación al contrato de servicios públicos, particularmente en relación con los actos de facturación, suspensión y corte del servicio, los cuales, además se consideran actos administrativos, o el procedimiento para la imposición de sanciones en el cual se debe observar el debido proceso que rige para las actuaciones administrativas.” (Corte Constitucional, sentencias C-558 de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería y T-224 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández).

¹² Ver Sentencias T-720 de 2005; T-558 de 2006; 815 de 2006; T-197 de 2007 y T-218 de 2007 entre otras.

¹³ Cfr. Sentencias T-815 de 2006 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra; Pinilla; T-041 de 2007; T-197 de 2007 Margo Gerardo Monroy Cabra; T-218 de 2007 MP. Nilson Pinilla entre otras.

Calle 40 NO. 44-39. Piso 4.

Teléfono: 3885156 Ext. 2030. www.ramajudicial.gov.co

Barranquilla – Atlántico. Colombia

Correo: lcto13ba@cendoj.ramajudicial.gov.co



No. SC5780 - 4



No. GP 059 - 4



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

habitantes del territorio nacional se ha hecho necesario la intervención excepcional del juez de tutela, en aras de materializar los derechos contenidos en el ordenamiento superior entendido éste no sólo como el articulado de la Carta Política sino, además, con la integración de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad.

“Por ello puede afirmarse que: i) por regla general la acción no resulta procedente para entrar a dirimir controversias entre el usuario y/o suscriptor y, las empresas de servicios públicos domiciliarios, por cuanto para ese fin existen otros medios de defensa judicial, ii) que excepcionalmente y solamente atendiendo las circunstancias de cada caso resulta procedente la acción de tutela para proteger derechos fundamentales del administrado como por ejemplo la honra, el derecho de petición, el derecho a la igualdad, el derecho de defensa y el debido proceso cuando éstos han sido amenazados o vulnerados por las empresas de servicios públicos domiciliarios.”
(Negrillas fuera del original)

Igualmente, en la sentencia en cita, la Corte concluyó que, las decisiones adoptadas por las empresas de servicios públicos domiciliarios constituyen actos administrativos impugnables ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, siendo dicho medio de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos incoados. Ciertamente, sobre el particular se dijo lo siguiente en aquella oportunidad:

“Ahora bien, en lo que hace relación a la acción de tutela contra las actuaciones u omisiones de las empresas de servicios públicos domiciliarios cabe señalar que según la jurisprudencia constitucional existe otro medio de defensa judicial cuales son las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En efecto, ha considerado esta Corporación que las decisiones adoptadas por las empresas de servicios públicos domiciliarios se concretan en actos administrativos de carácter particular impugnables por medio de la acción de nulidad y restablecimiento, por lo tanto esta Corporación ha entendido que existe un medio de defensa judicial idóneo y eficaz que permite la protección de los derechos fundamentales en juego, pues una vez demandado el acto el interesado puede solicitar su suspensión provisional.

“Entonces, de conformidad a la jurisprudencia constitucional la solicitud de suspensión provisional de los actos proferidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios, en el curso de una acción de nulidad y restablecimiento reúne las condiciones de idoneidad y eficacia exigidas por la jurisprudencia constitucional para desplazar a la acción de tutela como mecanismo protector de los derechos fundamentales de los usuarios¹⁴.” (Negrillas fuera del original)

Es claro que la jurisprudencia ha dejado sentada como regla general aquella que determina la improcedencia de la acción de tutela como mecanismo de defensa procedente para definir las controversias entre los usuarios y las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.

De otro lado, la Ley 142 de 1994, otorgó a las empresas de servicios públicos domiciliarios una situación de privilegio frente a sus usuarios, la que se ve reflejada en la posibilidad de dictar ciertos actos que deben ser entendidos como privilegios indispensables para garantizar su funcionamiento y permitirles, además, la prestación de dichos servicios de manera continua, eficiente y eficaz¹⁵. Así, la Corte en diversos pronunciamientos ha indicado que el cobro de la energía dejada de facturar, previo trámite administrativo adelantado por la empresa prestadora del servicio público domiciliario, constituye verdaderos actos administrativos que se desprenden de la posición privilegiada que les ha otorgado la ley frente a los usuarios de dichos servicios.

Al respecto, este Tribunal Constitucional en sentencia T-720 de 2005, hizo referencia a los artículos 149 y 150 de la ley 142 de 1994, para establecer la diferencia entre el cobro de la energía dejada de facturar y la

¹⁴ Al respecto puede consultarse la sentencia T-1204 de 2001.

¹⁵ Sobre el particular, consultar las sentencias T-927 de 1999 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-1432 de 2000 M.P. Antonio Barrera Carbonell y T-1252 de 2005 M.P. Alvaro Tafur Galvis.
Calle 40 NO. 44-39. Piso 4.

Teléfono: 3885156 Ext. 2030. www.ramajudicial.gov.co

Barranquilla – Atlántico. Colombia

Correo: lcto13ba@cendoj.ramajudicial.gov.co



No. SC5780 - 4



No. GP 059 - 4



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

imposición de sanciones pecuniarias, dejando claro que el cobro efectuado por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, respecto de la energía dejada de facturar, cuenta con sustento legal y, por tanto, adquiere la categoría de acto administrativo. Al respecto se indicó:

“los artículos 149 y 150 de la Ley 142 de 1994¹⁶, (...) permiten cobrar los servicios no facturados en caso de desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Dichos cobros serían diferentes a las sanciones previstas por el párrafo segundo del artículo 54 de la Resolución 108 de la CREG, el cual autoriza una sanción pecuniaria máxima equivalente al consumo no facturado, o en el contrato de Condiciones Uniformes el cual autoriza a la empresa a cobrar sanciones pecuniarias incluso por el doble del valor de los consumos no registrados, previsiones que como antes se registró son abiertamente inconstitucionales.”¹⁷

Adicionalmente la misma sentencia señaló expresamente que existe una clara diferencia entre lo que recaudan las empresas de servicios públicos por concepto de facturación de servicios dejados de cobrar y una eventual sanción impuesta por dichas empresas. En aquella oportunidad se dijo:

“...esta Sala considera que el cobro de la energía consumida dejada de facturar no corresponde a una sanción pecuniaria y por lo tanto se ajusta a las prerrogativas concedidas por los artículos 149 y 150 de la Ley 142 de 1994. Adicionalmente tal cobro se realiza por medio de una factura adicional contra la cual puede interponer el usuario los recursos de la vía gubernativa y posteriormente puede ser debatida ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.”

(...)

...la Sala, se reitera, el acto por medio del cual se pretende el cobro de la energía dejada de consumir, no constituye el cobro de una sanción por parte de la empresa accionada, sino por el contrario, hace referencia al cobro de la energía consumida y dejada de facturar, como consecuencia de las irregularidades encontradas en el inmueble de la parte actora. Por otro lado, se destaca que en contra de la decisión empresarial atacada, se interpusieron los recursos propios de la vía, la que debía ser resuelta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, así en caso de emitirse pronunciamiento en contra de la parte accionante, dicha decisión puede ser debatida ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, donde además es procedente la solicitud de suspensión provisional del acto.

En este orden de ideas, considera la Sala que la acción de tutela es improcedente, pues la entidad accionante cuenta con otro medio de defensa para controvertir el asunto bajo estudio, así como la legalidad del procedimiento que se está llevando a cabo en las respectivas instancias del proceso administrativo atacado.

(...)” (Negrilla y subraya fuera de texto)

<Sentencia T-973 del 9 de octubre de 2.008, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández>.

“(...)”

ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Improcedencia general sobre controversias contractuales o pecuniarias entre los usuarios de servicios públicos domiciliarios y la empresa.

(...)

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir facturación emitida por empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Reiteración de jurisprudencia.(...)

En lo que respecta a las controversias originadas entre las empresas de servicios públicos domiciliarios y sus usuarios, la Corte Constitucional ha sostenido que la tutela resulta en principio improcedente, como quiera que el artículo 33 de la Ley 142

¹⁶ Estas disposiciones establecen: ARTÍCULO 149. DE LA REVISIÓN PREVIA. Al preparar las facturas, es obligación de las empresas investigar las desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Mientras se establece la causa, la factura se hará con base en la de períodos anteriores o en la de suscriptores o usuarios en circunstancias semejantes o mediante aforo individual; y al aclarar la causa de las desviaciones, las diferencias frente a los valores que se cobraron se abonarán o cargarán al suscriptor o usuario, según sea el caso.

ARTÍCULO 150. DE LOS COBROS INOPORTUNOS. Al cabo de cinco meses de haber entregado las facturas, las empresas no podrán cobrar bienes o servicios que no facturaron por error, omisión, o investigación de desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Se exceptúan los casos en que se compruebe dolo del suscriptor o usuario.

¹⁷ Sentencia T-720 de 2005 MP. Humberto Antonio Sierra Porto.

Calle 40 NO. 44-39. Piso 4.

Teléfono: 3885156 Ext. 2030. www.ramajudicial.gov.co

Barranquilla – Atlántico. Colombia

Correo: lcto13ba@cendoj.ramajudicial.gov.co



No. SC5780 - 4



No. GP 059 - 4



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

de 1992¹⁸ dispone que la legalidad de las actuaciones de estas empresas se controvierte ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, previo agotamiento de la vía gubernativa.

Sin embargo, se ha sostenido que la acción de tutela procede excepcionalmente cuando la discusión de quien es el responsable del pago de los servicios públicos vulnera o ponga en peligro los derechos fundamentales del accionante, por la inminencia o la configuración de un perjuicio irremediable.¹⁹

*Ahora, puede ocurrir el evento en que sea necesario interponer la acción de tutela como mecanismo transitorio ante la inminencia de la configuración de un perjuicio irremediable; **en estos eventos es preciso que se demuestre que los medios de defensa disponibles no resultan ser eficaces en el caso concreto.**²⁰*

En conclusión, la acción de tutela en los casos que se discuta la facturación emitida por empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, es un mecanismo residual de defensa que procederá como mecanismo transitorio o definitivo de protección de derechos fundamentales solo en los eventos que se encuentre probado la configuración de un perjuicio irremediable.²¹ (Negrilla y subraya fuera de texto) <Sentencia T-370 del 26 de mayo de 2.009, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio>.

Con base a lo anterior, el Despacho considera que no existen los supuestos fácticos que ameriten tutelar el derecho fundamental al debido proceso invocado, siendo que en últimas lo que se presenta es una controversia contractual o pecuniaria acerca del pago del servicio público energía, situación patrimonial que es ajena al mecanismo de amparo ante la existencia de otros mecanismos eficaces de defensa ordinarios, debiéndose declarar improcedente la presente acción.

¹⁸ Ley 142 de 1992, Artículo 33. Facultades especiales por la prestación de servicios públicos. “Quienes prestan servicios públicos tienen los mismos derechos y prerrogativas que esta Ley u otras anteriores confieren (...) pero estarán sujetos al control de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de sus actos, y la responsabilidad por acción y omisión en el uso de tales derechos.” (Negrilla fuera del texto original)

¹⁹ En la Sentencia T-270 de 2004 se determinó: “[i)] por regla general la acción no resulta procedente para entrar a dirimir controversias entre el usuario y/o suscriptor y, las empresas de servicios públicos domiciliarios, por cuanto para ese fin existen otros medios de defensa judicial, [(ii)] que excepcionalmente y solamente atendiendo las circunstancias de cada caso resulta procedente la acción de tutela para proteger derechos fundamentales del administrado como por ejemplo la honra, el derecho de petición, el derecho a la igualdad, el derecho de defensa y el debido proceso cuando éstos han sido amenazados o vulnerados por las empresas de servicios públicos domiciliarios, [entre otros].”

²⁰ En cuanto a este tema, en la Sentencia T-649 de 2005, se explicó que deben reunirse algunas de las siguientes características: “(i) debe ser cierto e inminente, es decir debe haber una certeza razonable sobre su ocurrencia; (ii) debe ser grave, en el sentido de afectar un bien o interés jurídicamente protegido y altamente significativo para el peticionario; (iii) debe requerir medidas urgentes de prevención o mitigación, en forma tal que se evite “la consumación de un daño jurídico irreparable”.

²¹ En la Sentencia T-407 de 2007 la Corte sobre la base de los criterios anteriormente expuestos estudió 5 expedientes acumulados bajo el siguiente problema jurídico, “corresponde a esta Sala determinar si quienes se declaran usuarios del servicio público tienen legitimidad para actuar frente a la empresa prestadora cuando la factura de cobro se expide a nombre de un tercero, sin que los accionantes acrediten estar representando a este último. Si los accionantes tuvieran legitimidad para actuar deberá definirse si la acción de tutela es procedente para reclamar sobre la facturación (...).” Todos los casos fueron denegados por improcedentes y se confirmaron las sentencias revisadas ante la verificación de no haberse agotado los mecanismos de defensa existentes en estos casos, sumado a que no se probó ni se argumentó en que consistía en cada caso la configuración de un perjuicio irremediable. En el mismo sentido, en la Sentencia T-296/07 esta Corporación revisó 3 expedientes acumulados bajo el siguiente problema jurídico “de acuerdo con la situación fáctica planteada por los tres casos acumulados, en esta ocasión corresponde a la Sala determinar si las empresas de servicios públicos demandadas, al exigir a los accionantes el pago de varias facturas dejadas de cancelar por sus arrendatarios, que exceden el pago mínimo autorizado por el artículo 140 de la Ley 142 de 1994, cuando hay rompimiento de la solidaridad, vulnera o no sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.” Todos los asuntos fueron denegados por improcedentes, sin entrar a estudiar el caso de fondo, ante la verificación de que ninguno de los demandantes agotó los mecanismos de defensa establecidos para este tipo de alegatos, ni tampoco sustentaron la configuración de un perjuicio irremediable. (Negrillas fuera de los textos originales).

Calle 40 NO. 44-39. Piso 4.

Teléfono: 3885156 Ext. 2030. www.ramajudicial.gov.co

Barranquilla – Atlántico. Colombia

Correo: lcto13ba@cendoj.ramajudicial.gov.co



No. SC5780 - 4



No. GP 059 - 4



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, por las razones expuestas.

SEGUNDO: NOTIFIQUESE esta providencia a las partes por el medio más expedito, conforme a lo dispuesto en los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991, y 5° del Decreto 306 de 1992.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión, en firme, envíese a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, tal como lo disponen los artículos 86 de la C.P. y 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFIQUESE Y CÚPLASE

EL JUEZ,


JOSE IGNACIO GALVAN PRADA
ID-2024-00065-00